

# ***Nicaragua: un panorama electoral incierto***

**Andrés Pérez-Baltodano: director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Su último libro, *Entre el Estado conquistador y el Estado nación*, fue publicado en 2003 por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y la Fundación Friedrich Ebert.**

La institucionalización de un sistema democrático requiere de un consenso social sobre las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad, que sirva de marco a la competencia político-partidaria. En condiciones democráticas, ese consenso debe reflejar las obligaciones y los derechos de los diferentes sectores de la sociedad. Sin un consenso social, los resultados electorales no necesariamente gozan de legitimidad. Peor aún, como señala la teoría política, la democracia electoral sin consenso social puede convertirse en un mecanismo para formalizar divisiones sociales expresadas a través de opciones partidarias.

En sociedades con democracias consolidadas, los procesos electorales definen la manera en que se administra un régimen económico, político y social institucionalizado. Los partidos que compiten en esos procesos ofrecen diferentes maneras de *gobernar* regímenes que gozan de estabilidad y legitimidad. Así, las variaciones entre una administración laborista y una conservadora en Gran Bretaña, o entre una administración socialdemócrata y una demócrata cristiana o liberal en Alemania, son, desde una perspectiva histórica, marginales.

A partir de las elecciones que pusieron fin al experimento revolucionario sandinista, en 1990, Nicaragua ha vivido una democracia electoral sin consenso social que ha mantenido al país en una situación de crisis institucional permanente. Para comprobarlo, basta comparar las variaciones, incrementales y predecibles, que generan los resultados electorales en los países que gozan de sistemas democráticos consolidados, con el carácter cuasi fundacional e incierto de los resultados electorales en Nicaragua. Cada una de las elecciones que se han realizado durante la llamada «transición democrática» nicaragüense ha abierto un horizonte político impredecible.

En este sentido, las elecciones del 5 de noviembre de 2006 no serán diferentes, ya que tampoco contarán con el sustento de un consenso social que condicione la gestión gubernamental del partido ganador. Muchos de los factores que determinan el orden social se mantienen indefinidos en Nicaragua: la prioridad que debe ocupar el tema de la pobreza en un país que hoy ocupa el segundo lugar en la escala de desnutrición en América Latina; las relaciones entre los poderes del Estado; el modelo de inserción internacional de la economía; las relaciones entre Iglesia y Estado; presidencialismo o parlamentarismo; democracia representativa o democracia participativa, entre otras cuestiones.

### ***Democracia electoral sin consenso social***

El cambio de régimen iniciado en 1990 con la victoria de Violeta Barrios de Chamorro no se produjo en el contexto de un consenso social sobre la manera de organizar la sociedad después del experimento revolucionario. El marco normativo de la reforma económica neoliberal impulsada por el gobierno de Barrios de Chamorro (1990-1997) fue prácticamente impuesto por los organismos financieros internacionales que apoyaban la transición. Ese marco, a su vez, impuso fuertes condicionamientos al modelo democrático y dificultó la articulación de un consenso social que reflejara las necesidades y aspiraciones de una sociedad que se mantuvo políticamente polarizada entre sandinistas y antisandinistas.

En las elecciones de 1996, la alianza antisandinista liderada por Arnoldo Alemán y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo una clara victoria sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su candidato, Daniel Ortega. Contó con el abierto apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Católica nicaragüense. Entre 1997 y 2002, Alemán mantuvo el modelo económico adoptado por el gobierno de Barrios de Chamorro e inició uno de los períodos más corruptos en la historia de Nicaragua. El reporte de Transparencia Internacional correspondiente al año 2001 colocó a Nicaragua entre los quince países más corruptos del mundo, y como el tercero más corrupto de América Latina.

Durante el gobierno de Alemán, además, ocurrieron varias quiebras de bancos privados que le costaron al Estado 7.000 millones de córdobas, lo que equivale a cinco veces el presupuesto anual de educación del país o a 25 veces el presupuesto del Estado para la compra de medicinas (Gobierno de Nicaragua). Solo las pérdidas ocasionadas por la quiebra fraudulenta del Interbank costaron 300

millones de dólares. Ese banco funcionaba como el «centro del accionar empresarial del capital sandinista surgido de la piñata de los años 90» (*Envío*, pp. 8-9). «La piñata» es la expresión con que los nicaragüenses hacen referencia a la adquisición ilegítima, por parte de políticos sandinistas, de propiedades del Estado durante los meses posteriores a su derrota electoral en 1990.

La corrupción administrativa del gobierno de Alemán tuvo como contraparte el desmoronamiento doctrinario de los dos principales partidos políticos, que empezaron a funcionar como «pandillas» organizadas para defender sus propios intereses. El liberalismo del PLC dejó de ser una doctrina y se convirtió en una etiqueta para el mercadeo electoral. El FSLN, por su parte, abandonó sus principios revolucionarios para convertirse en una organización ultra pragmática que trabaja para mantener y ampliar su poder de cualquier forma. Ricardo Coronel Kautz, uno de sus principales dirigentes, defendía la conducta de su partido argumentando: «la ética no es más que un prejuicio burgués».

Desprovisto de principios ideológicos, éticos o doctrinarios, el FSLN empezó a colaborar con el PLC. Utilizando su aplastante mayoría en la Asamblea Nacional, liberales y sandinistas terminaron repartiéndose el poder en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El pacto, además, hizo posible la aprobación de una ley que legalizó la «piñata» y dejó abiertas las puertas para la introducción de una reforma constitucional que perpetuaría el poder de los dos grandes partidos.

Por otro lado, el acuerdo estableció un sistema de protección personal para los líderes de ambas fuerzas políticas. Ortega hizo uso de esa protección cuando, amparado en su inmunidad parlamentaria y con el apoyo de liberales y sandinistas en la Asamblea Nacional, evadió las consecuencias legales de las acusaciones de abuso sexual hechas en su contra por su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez. Arnoldo Alemán, por su parte, utilizaría la inmunidad parlamentaria para tratar de evadir las consecuencias legales de las acusaciones de corrupción que enfrentaría al terminar su mandato presidencial.

Finalmente, el pacto obstaculizó la formación de agrupaciones políticas alternativas, y solo la independencia que mantenían las Fuerzas Armadas impedía la consolidación de una nueva dictadura en Nicaragua.

En 2001, Enrique Bolaños Geyer, vicepresidente de Alemán y coordinador de un inoperante comité creado para velar por la transparencia administrativa del Estado, fue elegido por el PLC, con el apoyo del presidente, como el candidato presidencial de los liberales para las elecciones de noviembre. Al igual que su antecesor, Bolaños contó con el respaldo de la Iglesia y de Estados Unidos.

Reflejando una vez más el espíritu fundacional e impredecible que han tenido las elecciones en Nicaragua durante la transición posrevolucionaria, el gobierno de Bolaños adoptó una consigna grandilocuente: «La nueva era». Por su parte, los sandinistas y su candidato, Daniel Ortega, habían difundido durante la campaña una consigna que ofrecía a los nicaragüenses «la tierra prometida». Ambos partidos, en otras palabras, proponían crear una «nueva Nicaragua», mostrando, de esa manera, la ausencia de un consenso nacional institucionalizado sobre la naturaleza básica del orden social en el país.

El PLC obtuvo una nueva victoria, con un 56,3% de los votos, mientras que el FSLN alcanzó un 42,3 %. Para evitar convertirse en un títere controlado por Alemán, Bolaños aprovechó el descontento popular creado por la corrupción y emprendió una campaña contra los principales funcionarios del gobierno saliente involucrados en escándalos. Alemán, el principal responsable del saqueo del Estado –y también el más sorprendido por la «lucha contra la corrupción» iniciada por Bolaños–, fue sentenciado y llevado a prisión.

Alemán, sin embargo, aprovechó su poder como líder del PLC y su alianza con el FSLN para evadir el régimen carcelario nicaragüense. Alegando problemas de salud, permaneció internado durante meses en el mejor hospital de Managua y, finalmente, logró que la orden de detención fuera transformada en una «condena domiciliar», que le permite vivir lujosamente y manejar su partido desde la comodidad de su casa.

Desdichadamente, Bolaños perdió la oportunidad de convertir la lucha contra la corrupción en un movimiento político capaz de integrar a la fragmentada sociedad nicaragüense. El actual presidente optó por apoyarse en instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y, sobre todo, en el poder de EEUU: Washington estaba interesado en eliminar políticamente a Alemán y «limpiar» el PLC para convertirlo en una fuerza capaz de enfrentar electoralmente al FSLN. Sin embargo, el partido mantuvo su apoyo incondicional

al ex presidente encarcelado y llegó a declararse en oposición al gobierno de Bolaños, que había surgido de esa misma agrupación. Esto contribuyó a que se reforzara la alianza con los sandinistas.

Ortega también ha sabido aprovechar la debilidad política de Bolaños, a quien respalda o amenaza según su conveniencia: sobre la cabeza de Bolaños pende un juicio por supuestos delitos electorales, que el FSLN cuenta con poder para activar o dejar pasar.

En síntesis, los dos principales partidos, así como la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, funcionan con una lógica corrupta en la que llegar al poder es la única motivación para armar o desarmar alianzas, cumplir o incumplir promesas. Ese sistema ha demostrado ser indiferente a las necesidades de una sociedad que no cuenta con los derechos, los niveles de organización y los instrumentos necesarios para condicionar la acción de sus líderes políticos y representantes en el Estado.

### ***La lucha contra el pacto***

Durante el gobierno de Bolaños, las organizaciones de la sociedad civil y los principales medios de comunicación lucharon infructuosamente contra el pacto entre los dos partidos. Dentro de cada una de ellas, además, surgieron movimientos disidentes que se oponían al acuerdo: algunos liberales y sandinistas rechazaban la corrupción de sus líderes por razones éticas, mientras que otros consideraban que las conducciones de Ortega y Alemán disminuían las posibilidades de éxito electoral e impedían el desarrollo de nuevos liderazgos.

La disidencia antipacto se materializó, en el PLC, en los esfuerzos electorales del banquero Eduardo Montealegre, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Finanzas en los gobiernos de Alemán y Bolaños, quien cuenta con el apoyo de importantes disidentes liberales, la elite financiera del país y el Partido Conservador. En el FSLN, la disidencia está liderada por Herty Lewites, ex ministro de Turismo durante el régimen sandinista y ex alcalde de Managua entre 2000 y 2004, quien encabeza el Movimiento de Rescate del Sandinismo, integrado por conocidos líderes políticos e intelectuales. En las encuestas de opinión de los últimos seis meses, Lewites aparece como el candidato más popular, Montealegre figura en el segundo puesto y Ortega en el tercero.

Como era previsible, el PLC ha intentado deslegitimar la candidatura de Montealegre, en tanto que el FSLN ha tratado de desacreditar a Lewites. Peor aún, Daniel Ortega, junto con otros miembros de la conducción sandinista, ha intentado activar sentimientos antisemitas en la población, mayoritariamente cristiana, poniendo de relieve la ascendencia judía de Lewites: han hablado del peligro de los «levitas» y de la traición de «Judas» para desacreditar al ex alcalde. Ortega, incluso, llegó a amenazar con que «los Judas» podían «terminar colgados».

En este panorama, Lewites recurrió a la comunidad internacional, principalmente a gobiernos y partidos políticos europeos y latinoamericanos, para denunciar los ataques de los líderes del pacto FSLN-PLC. Su estrategia parece estar funcionando: el FSLN sabe hoy que pagaría un precio muy alto si decidiera manipular el Poder Judicial y el Poder Electoral para inhibir al candidato.

Nada, sin embargo, asegura que Ortega y Alemán se resignarán a competir contra los disidentes de su partido y, mucho menos, a perder las elecciones de noviembre. De acuerdo con una investigación reciente, más del 55% de los nicaragüenses temen un fraude electoral (Confidencial 2005).

En medio de este complejo panorama preelectoral, la embajada de EEUU trabaja activamente para unificar las candidaturas de Montealegre con las de otros postulantes de la misma orientación política: la unificación de las distintas alternativas liberales, sin la participación de Alemán, ofrece mejores garantías de victoria contra el FSLN. Hasta el momento, EEUU no apoya ni rechaza abiertamente la candidatura de Lewites.

Dos son las principales razones que explican los esfuerzos de Washington para impedir una victoria del FSLN. En primer lugar, la presencia de actores de la Guerra Fría y viejos enemigos de los sandinistas en el gobierno de George W. Bush. Y, por otro lado, la preocupación que genera la amistosa relación entre Daniel Ortega y el presidente venezolano Hugo Chávez, sobre todo ahora que la victoria de Evo Morales en Bolivia ha reforzado la presencia de una izquierda latinoamericana en el poder, abiertamente crítica hacia EEUU.

***El incierto panorama electoral***

La lucha preelectoral nicaragüense ha tenido dos ejes. El primero, que ya analizamos, es el enfrentamiento entre las fuerzas del pacto FSLN-PLC y los movimientos que se oponen a esa alianza. El segundo son las tensiones entre el FSLN y el PLC, que se manifiestan en los esfuerzos permanentes de cada uno de esos partidos por subordinar a su socio y afianzar su posición para las elecciones de noviembre.

Una victoria del FSLN de Daniel Ortega generaría un gobierno que se inclinaría a mantener una alianza de conveniencia con el PLC, improvisando, al mismo tiempo, un esquema que permita balancear la retórica antiimperialista, las tendencias populistas y la visión ultrapragmática de la política para mantenerse en el poder. Una victoria del PLC de Arnoldo Alemán representaría un triunfo de la corrupción y la impunidad, la continuación del pacto de conveniencia con el FSLN y, prácticamente, el colapso del experimento democrático nicaragüense. Si Lewites y Montealegre lograran sobrevivir a los esfuerzos de Ortega y Alemán por eliminarlos y presentarse como candidatos, los nicaragüenses tendrían la oportunidad de escoger entre el final o la continuación del pacto FSLN-PLC, además de poder optar entre las visiones de cada uno de los candidatos.

Tomando como referencia la historia y la composición de los movimientos que apoyan las candidaturas de Montealegre y Lewites, las trayectorias políticas de ambos personajes y lo que han dicho hasta ahora sobre el futuro de Nicaragua, es posible distinguir dos elementos centrales que forman parte de los modelos de Estado y sociedad en las visiones políticas de cada uno.

El Movimiento de Rescate del Sandinismo, de Lewites, rechaza el estatismo y el populismo, al tiempo que defiende la idea del Estado como un mecanismo institucional que debe articular y normar las relaciones entre el mercado y la sociedad. Para él, la dinámica del mercado tiene que enmarcarse dentro de condicionamientos legales que sirvan para proteger un bien común que priorice el combate a la pobreza. Esta visión es contraria a la visión neoliberal, más convencional, de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, que apoya a Eduardo Montealegre, que se inclina por adecuar la organización del Estado y de la sociedad a los requerimientos del mercado.

En segundo lugar, Lewites intentaría profundizar la democracia mediante el desarrollo de los derechos ciudadanos, apoyándose en la capacidad de la

población para domesticar al Estado. Montealegre, por su parte, tiende a asumir que, para profundizar la democracia, es necesario reforzar las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de generar las condiciones de estabilidad que exige el modelo de mercado neoliberal.

Lewites, en otras palabras, representa una opción de izquierda democrática que, en términos generales, se enmarcaría dentro de la tendencia política representada por las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva en Brazil y Néstor Kirchner en Argentina. Los antecedentes y el discurso de Montealegre, por otra parte, representan la continuidad del modelo económico y de gobernabilidad neoliberal impuesto en 1990, pero sin corrupción. Las diferencias políticas entre ambos hacen improbable la unificación de estos dos líderes para enfrentar a los candidatos del pacto FSLN-PLC. A pesar de eso, hay quienes apoyan la idea de una fórmula presidencial compuesta por Lewites y Montealegre.

### ***Conclusión: ¿qué puede hacer Europa?***

En este contexto complejo, los países europeos pueden jugar un papel importante en la creación de condiciones que permitan superar la principal debilidad del sistema político nicaragüense: la ausencia de un consenso social que ponga fin a la polarización y el pactismo. En concreto, y a más corto plazo, Europa puede utilizar su influencia para evitar el fraude electoral en noviembre, pero también para evitar la eliminación antidemocrática de los candidatos que se oponen al pacto FSLN-PLC.

En otras palabras, puede facilitar la profundización de la democracia nicaragüense y ayudar a generar condiciones adecuadas para la competencia sin caer en la manipulación, como hace hoy EEUU, cuya intervención obstaculiza la articulación de un auténtico balance de fuerzas que refleje la voluntad democrática de los nicaragüenses.

### ***Bibliografía***

«Ciudadanos temen un fraude en elecciones 2006» en *Confidencial* N° 463, 20-26, 11/2005, p. 1.  
 Coronel Kautz, Ricardo: «Política y ética en Nicaragua» en *El Nuevo Diario*, 23/9/2005, Página de Opinión.



Gobierno de Nicaragua: «Incontables desafíos, una sola voluntad», 2002, en <[www.presidencia.gob.ni/](http://www.presidencia.gob.ni/)>.  
«Golpes y contragolpes, propuestas y contrapropuestas» en *Envío* N° 280, 7/2005, Managua, pp. 3-12.  
Transparencia Internacional: «Índice de percepción de corrupción», 2001, en <<http://transparency.org/>>.